

dente Allende quien había llamado a Prats para denunciarle el comportamiento de Canales en la unión social de Viña del Mar, y había exigido su retiro de las filas.

Esto fue lo que el 14 de septiembre de 1972 denunció públicamente Salvador Allende como «el plan septiembre» para «derrocarlo». Se basó en las informaciones que el general Prats le había llevado. Pero lo que Allende no sabía era que en verdad había un plan, pero en octubre.

Octubre de 1972

En ese plan, planificado por la Sociedad de Fomento Fabril, y febrilmente apoyado por la CIA, no figuraban las Fuerzas Armadas. Era una conspiración civil para detener al país, ponerlo al borde del colapso total y obligar con ello a renunciar a Allende, tras perder un plebiscito que debía convocar como única manera de sacar al país de la paralización. La SOFOFA y la CIA estimaban, en septiembre, que octubre era una buena fecha porque ya la situación de «enflaquecimiento del apoyo popular al Gobierno es mucho, por las alzas, colas para comprar alimentos, escasez de todos los productos y la inoperancia del Gobierno».

El día 10 de octubre, a propósito de un proyecto del Gobierno de formar una compañía estatal de transporte camionero en la provincia de Magallanes, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León Vilarín (hombre ligado al «sindicalismo libre» de los Estados Unidos), paraliza a sus asociados en todo el país «en señal de protesta contra la dictadura estatal marxista». Se pliegan a su paro la Confederación del Comercio Detallista, dirigida por Rafael Cumsille (democratristiano del equipo de Frei), «en defensa de la libertad de trabajo», y lo siguen la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular (dirigida por democratristianos), Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura, Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros y Colegio Médico. Se suman técnicos y empleados de algunos bancos comerciales todavía no estatizados... En suma, todos los empresarios privados del país, la mayoría de los profesionales y un pequeño sector de empleados se declaran en paro indefinido y levantan como bandera lo que llaman «el pliego de

Chile». El «pliego» contenía exigencias políticas de variado orden, pero su esencia era destruir todo lo avanzado en la aplicación del programa de la Unidad Popular.

El presidente Allende nombra «interventor» en la locomoción colectiva de Santiago al general de brigada Herman Brady Roche, director de la Academia de Guerra. El general Brady, del grupo de los «reformistas», hace todo lo necesario que, al revés de lo que le pedía Allende, los microbuses y taxibuses no se pongan en movimiento. Alega que hay tres mil quinientos vehículos de ese carácter en Santiago, que la guarnición de la capital tiene menos de siete mil hombres, y como tendría que poner un soldado en cada microbús y taxibús para que pudiera trabajar protegido de los sabotajes de los comandos fascistas, haciendo dos turnos de ocho horas tendría que ocupar siete mil soldados solamente en eso, dejando sin guarnición militar la ciudad. La excusa era esa, pero la verdad era otra.

El general Brady estaba recibiendo instrucciones de su grupo de generales «reformistas» para «dejar que Allende se ahogue solo». «No le demos apoyo de ningún tipo, pero sin que se note.»

Pero, de improviso, comenzó a surgir un personaje que ni los miembros de la Sociedad de Fomento Fabril, ni la CIA, ni los generales de las Fuerzas Armadas habían tomado en cuenta. Ocurre que mientras los parlamentarios demócratacristianos y nacionales, a través de las radios y diarios con ediciones extra, vociferaban todo el día que «el país ha caído en un colapso», «todo Chile está detenido», «los trabajadores exigen que Allende renuncie o llame al plebiscito», en las calles, caminos, asentamientos campesinos, fábricas, oficinas públicas y poblaciones se comienzan a ver camiones transportando carga, vehículos llevando pasajeros, miles de obreros, silenciosos, con los puños cerrados y la mirada hosca, caminando por las calles hacia su trabajo todos los días; máquinas funcionando, arados labrando la tierra. En suma, el país caminando. Caminando a medio tranco, es cierto, pero caminando. Todos los patrones en sus casas y los trabajadores haciendo caminar las fábricas. Todos los grandes dueños de la tierra en la ciudad y los campesinos haciendo germinar la tierra.

Comenzó a verse una movilización popular gigantesca. Obreros, campesinos y empleados, reforzados por los estudiantes, salieron a combatir el paro patronal.

El Gobierno había decretado zonas de emergencia (control

militar) en las veinticinco provincias de Chile, pero no se veía ni un solo soldado allanando casas de patrones para obligarlos a ir a trabajar. Sin embargo, se veían miles de obreros trabajando. A medias, es cierto, porque tenían que formar brigadas de choque para repeler los criminales atentados de los fascistas. Pero impedían el colapso económico.

En las barriadas industriales de Santiago, comenzaron a aparecer con personalidad propia los llamados «cordones industriales». Se habían comenzado a formar en junio de ese mismo año, llevados por la necesidad de combatir de alguna manera el sabotaje patronal, el mercado negro, la especulación y la escasez de materias primas industriales. Habían nacido como «organizaciones de trabajo, comercio, planificación laboral y defensa contra los enemigos de clase» en la zona industrial de Los Cerrillos, al sudoeste de Santiago. Habían sido vilipendiados por algunos políticos de los propios partidos de la Unidad Popular, calificándolos de «organizaciones extremistas contrarrevolucionarias» manejadas por «ultras».

Ahora, en octubre, mostraban su fuerza. Hacían caminar la industria, ocupaban los monopolios industriales, y sin patrones, sin técnicos, sin gerentes, los hacían caminar. Hacían asambleas y se discutía esto: «¿Qué plazo les fijamos a los momios (reaccionarios) para que vuelvan a trabajar?» O también: «Debemos organizarnos en brigadas armadas populares para derrotar definitivamente a nuestros enemigos... Los militares están ayudando a los patrones con su pasividad... El problema tenemos que resolverlo nosotros mismos, el pueblo».

Los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas recibían informes diarios sobre la «movilización popular.» Y también otro tipo de informes. Informes internos de «las instituciones». Con el espectáculo del país funcionando sin empresarios, sin patrones, algunos mandos militares habían expresado, admirados: «Estos rotos se la pueden», o algo más específico: «El Gobierno de Allende nos merece respeto... Está haciendo algo extraordinario.»

Es decir, la puesta en tensión de todas las fuerzas durante el desarrollo del «plan octubre», había dejado al descubierto la existencia de un grupo de mandos militares «simpatizantes de Allende». La situación era grave para quienes habían pensado que había total coherencia ideológica en la estructura militar.

Y se hacía más grave si, como lo señalaban los informes del SIM, había «un número cercano a los ochenta mil obreros movi-

lizados sólo en la provincia de Santiago». Era como para pensarlo: ochenta mil obreros en ánimo de combate, con una guarnición militar de cinco o seis mil hombres.

Los generales «reformistas», «duros» y «constitucionales» se reunieron para fijar «una táctica para el difícil momento». Se llegó a un acuerdo general de «apoyar a Allende para una salida política». ¿Por qué? Porque de ese modo se puede «detener a tiempo la furia popular», la cual las fuerzas armadas «difícilmente podrán destruir sin entrar en una guerra civil prolongada, de desgaste», que dejaría al aparato militar, aun en el caso de vencer, semidestruido e inerte «frente a sus enemigos externos», y fácilmente «vulnerable frente a los enemigos internos»; porque la economía está tan deteriorada que si sumamos el efecto del actual paro al que vendría con una guerra civil, «nos desmoronaríamos», pasando a ser «los parias de América Latina» y «nuestro país se desmembraría»; porque los políticos civiles «se han demostrado incapaces de obligar a Allende a renunciar».

Al mismo tiempo, los oligarcas de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, viendo el mismo paisaje de movilización popular, y siendo testigos de la «pasividad» de las Fuerzas Armadas, instruyeron a sus políticos para que buscaran una «salida política de transacción», abandonando la meta, por ahora, de derrocar a Allende.

En el Gobierno, por consejo de algunos dirigentes del partido socialista, se le sugiere a Allende que nombre un Gabinete que tenga al general de Ejército y comandante en jefe Carlos Prats González como ministro del Interior (cargo equivalente a vicepresidente de la República), para dar una imagen de fuerza y de «apoyo al Gobierno» de las Fuerzas Armadas.

Se hace la proposición al general Prats, éste consulta con sus generales y con los mandos superiores de la Marina y la Fuerza Aérea, y se llega a la conclusión de que la proposición es buena porque permite las alternativas siguientes: Controlar desde el Ministerio del Interior (a cargo de todo el aparato policial chileno) las actividades de los trabajadores y sus organizaciones «no clásicas», a fin de estudiarlas con precisión; avanzar en la tesis de los generales «constitucionalistas» de llegar a formar un Gobierno Allende-FF.AA.; dar un respiro a una situación crítica en grado máximo, para llegar hasta las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973, que son una «oportunidad

absolutamente constitucional» de destituir constitucionalmente a Allende y reemplazarlo por un «demócrata probado»; tener tiempo para «revisar los mandos de las instituciones», puesto que habían sido detectados «focos de opinión extremista» entre ellos, y cambiarles destinación, quitándoles mando de tropa a los que lo tuvieran; fijar una táctica adecuada al momento para la idea general de los altos mandos militares de «prepararse para gobernar el país».

Sin embargo, estos razonamientos no les fueron comunicados a los cómplices del «plan octubre», Eduardo Frei y Onofre Jarpa, principales interesados en fomentar un golpe militar que pudiera conducir, a uno de ellos, a la presidencia. A estos políticos se les explicó que las Fuerzas Armadas no estaban todavía en situación de manejar el país, y por eso no habían podido hacer nada en el paro.

El 2 de noviembre, Allende anuncia cambio de Gabinete: ministro del Interior, el general comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González; ministro de Obras Públicas, el contralmirante Ismael Huerta; ministro de Minería, el general de la Fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda.

El 5 de noviembre, Allende sale por dos semanas del país, en gira a Argelia, URSS, Marruecos y Cuba, y cortas estancias en Caracas y Lima. Queda como jefe de la nación el general Prats. Cuando Allende regresa Prats le entrega el mando constitucional. Parecía el mejor momento de seguridad para el Presidente y, sin embargo, no lo era.